

Las elecciones generales de 2011 en Nicaragua: refuerzo de la hegemonía del FSLN y cambio de horizontes políticos.

Armando Chaguaceda

Resumen

El artículo ofrece un balance sobre los antecedentes, desarrollo y resultados de las pasadas elecciones generales en Nicaragua, que dieron la victoria a Daniel Ortega, candidato del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), otorgándole un nuevo -y cuestionado- mandato. Se refieren las prácticas autoritarias y conflictos con la oposición desplegados durante el proceso electoral, valorando su impacto en la reconfiguración de los escenarios políticos venideros, signados por una pretensión hegemónica del FSLN.

Palabras Claves: FSLN, instituciones, conflicto político, elecciones, oposición, hegemonía.

The 2011 Nicaraguan General Elections: A Strengthening of the FSLN Hegemony and a Change in Political Horizons.

Abstract

This article offers an analysis of the recent Nicaraguan General Elections including background information, a look at the campaign and the results that gave Daniel Ortega, from Sandinista National Liberation Front (FSLN) his new, albeit questioned, reelection. The paper addresses the authoritarian practices and conflicts with the opposition during the electoral process, assessing their impact on the future political panorama marked by the FSLN's desire for hegemony.

Keywords: FSLN, institutions, political conflict, elections, opposition, hegemony.

1. Introducción

En las elecciones generales del 5 de noviembre de 2006, el FSLN¹ y su candidato Daniel Ortega obtuvieron un premio largamente anhelado: su regreso (tras 16 años) al gobierno nacional y, por ende, la presidencia de la república. A la pluralización del universo electoral antisandinista (y la fractura del Partido Liberal Constitucional², su principal enemigo) se unió la cauta estrategia del FSLN de modificar su discurso radical sin sacrificar las fortalezas heredadas de la etapa revolucionaria (una estructura partidaria sólida y disciplinada, masivas organizaciones sociales afines, simpatías en los cuerpos armados) y el legado simbólico de la Revolución en amplios sectores de la población. Todo ello hizo conexión con la esperanza de amplios sectores de la población nicaragüense -empobrecidos por década y media de políticas abiertamente neoliberales- otorgando al Frente el margen de ventaja (ver Anexo) que le llevaría de vuelta al gobierno nacional a partir de enero de 2007.

Las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008 constituyen ejemplo para valorar el desempeño democratizador del GRUN. Los comicios (que en la zona norte de la Costa Atlántica fueron postergados más de dos meses debido al paso del huracán Félix) convocaron alrededor de 4 millones de votantes para elegir (en 11000 juntas receptoras y 4000 centros de votación) a los alcaldes y concejales de 146 municipios. La alcaldía más disputada era la de Managua, con el líder de ALC³ Eduardo Montealegre enfrentado al candidato sandinista Alexis Arguello.

Los problemas de cara a estos comicios comenzaron varios meses antes de su realización⁴. El Consejo Supremo Electoral, máximo árbitro en materia partidista y comicial, se negó a acreditar a diversos observadores nacionales o extranjeros- incluidos la OEA o el capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional- alegando que no eran políticamente neutrales. En sustitución el CSE invitó a un grupo de especialistas de la región, adscritos a iniciativas regionales como el Protocolo de Quito⁵.

Aunque los resultados preliminares fueron conociéndose poco antes de la medianoche del 10 de noviembre, ya desde la tarde simpatizantes sandinistas salieron celebrar su supuesta victoria en Managua, al tiempo que los liberales declaraban la existencia de una amplia ventaja sobre el Frente en la capital nicaragüense. Al conocer unos resultados preliminares que lo desfavorecían, Eduardo Montealegre denunció que se estaba ante un intento de fraude, pidió a Ortega que no interviniese ante el Poder Electoral y rechazó reconocer los resultados dados por el CSE. En los días subsiguientes, sandinistas y liberales se enfrentaron en las calles de Managua, provocando el deceso de dos personas y heridas a otras, así como la destrucción de vehículos de la oposición y la prensa.

El Secretario General de la OEA expresó (11 de noviembre) su preocupación por las denuncias opositoras y los enfrentamientos. El gobierno nica-

ragüense -con apoyo del venezolano- denunció una supuesta campaña desestabilizadora apoyada por los EEUU y con el concurso del propio Insulza. Sin embargo, en el seno de la organización no prosperaron ni la moción presentada por Nicaragua contra la persona del Secretario General ni la impulsada por los EEUU en apoyo a la "gobernabilidad democrática" en la nación centroamericana. El Centro Carter -sumándose a un pedido previo de la Iglesia Católica nicaragüense- solicitó (14 de noviembre) una revisión de los resultados electorales con la participación de todos los partidos y los observadores internacionales, como forma para reducir la escalada de violencia y defender la institución del voto.

Los principales partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el CSE (14 de enero de 2009) 100 000 firmas solicitando el recuento total de los votos, pedido que fue rechazado, dejando en suspenso los resultados definitivos totales que nunca fueron presentados oficialmente. La neutralidad del CSE resultó severamente cuestionada toda vez que el Frente Sandinista preveía ganar en más de 60 alcaldías, un resultado perfectamente aceptable para un partido cuyo candidato había ganado las elecciones presidenciales con sólo el 38%. Sin embargo, la realización de un grupo de maniobras -entre estas el desconocimiento de los fiscales de la oposición en un 10% de las juntas- se hizo a la vista del CSE, lo cual según algunos analistas permitió al FSLN ganar 105 alcaldías, frente a 37 del PLC y sólo 4 de ALN, (Courtney, 2011).

Más recientemente, las elecciones generales del 6 de noviembre pasado (ver Anexo) renovaron parcialmente la Asamblea Nacional y otorgaron, en medio de numerosos cuestionamientos, un nuevo período de gobierno al mandatario Daniel Ortega. En un entorno de febril polarización, con un Frente Sandinista (FSLN) que ha copado ingentemente estructuras estatales y organizaciones sociales y frente a los recelos de diversos actores domésticos y foráneos que monitorearon el proceso, el desarrollo y resultados de las elecciones prefiguran un avance de la hegemonía del sandinismo y un cambio en el contexto para la acción opositora. A continuación se abordan el desarrollo y algunas consecuencias derivados de dicho proceso electoral.

2. Los antecedentes de las elecciones

Las principales normas que han regulado las elecciones generales de 2011 son, como en ediciones anteriores, la Constitución (aprobada en 1987 y posteriormente reformada), la Ley Electoral (2000), la Ley de Identificación Ciudadana (1993) y varios reglamentos del CSE⁶. El CSE, consagrado en la Constitución como cuarto poder del Estado, ostenta un mandato amplio que incluye no sólo la administración del proceso electoral sino también el registro y otorgamiento de personalidad jurídica a los partidos. Este poder ha servido para debilitar la autonomía de estas formaciones políticas, al incidir sobre la

continuidad de sus estructuras, militancias y proyectos políticos, lo cual resulta peligroso en un CSE cuya neutralidad es seriamente cuestionada tanto por actores domésticos como por entes internacionales (Unión Europea, 2011).

Por otra parte, el CSE opera un marco legal restrictivo para la creación de nuevos partidos, que define la extinción automática de todas las formaciones que no alcancen un mínimo de 4% de votos en las elecciones y obliga a los partidos regionales a concurrir en coalición con sus homólogos nacionales en las elecciones generales. Contrasta esta excesiva injerencia del CSE en la vida interna de los partidos con su renuencia a establecer mecanismos de regulación y control para la financiación de las campañas o para detallar y clarificar procedimientos tan importantes como los de votación, conteo e impugnación, escasamente normados en la Ley Electoral. En 2011 el CSE decidió no emitir regulaciones sobre asuntos clave del proceso electoral, como el registro de votantes, el ejercicio del derecho al voto y el recuento, además de postergar la depuración/actualización del registro electoral⁷, lo cual forzó a los partidos opositores a invertir cuantiosos recursos en la obtención de información y les obligó a prepararse para enfrentar procedimientos desconocidos, incrementando la visible asimetría entre los contendientes (Unión Europea, 2011).

En septiembre de 2010 un decreto presidencial -aprobado en el contexto de la fracasada renovación del ente comicial en la AN- amplió inconstitucionalmente el mandato de los 7 magistrados encabezados por Roberto Rivas, los mismos que gestionaron las pasadas elecciones municipales de 2008 (Unión Europea, 2011). Ello puso en evidencia la íntima relación sostenida entre la máxima dirección del estado y las autoridades encargadas de fungir como árbitros imparciales en las contiendas electorales; la cual pronto rendiría sus frutos.

Como resultado de la derrota en los comicios de 2008, la oposición perdió la iniciativa política al no ser capaz de generar un movimiento de masas para defender su voto y apostar -con excesiva atención- a las posibilidades de la presión externa y de un parlamento cada vez más controlado por el oficialismo para la revisión/anulación de los comicios. Sus líderes no pudieron movilizar a la población a protestar contra las reiteradas violaciones a la Constitución y sus denuncias fueron estériles para revertir la crisis de legitimidad del Consejo Supremo Electoral (Chamorro, 2011). Problemática de alta complejidad en un país que en 180 años de historia ha vivido -en promedio- situaciones bélicas cada 14 años (Courtney, 2011).

Sin una presión popular efectiva en las calles que le forzara a respetar el juego electoral, Ortega logró sortear de 2008 a 2011 la presión externa y expandió su base e incidencia social con los recursos provenientes de la ayuda económica venezolana (Chamorro, 2011). No obstante, durante todos estos años el Presidente apenas podía exhibir un respaldo similar al de sus homólogos de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) -electos con

claras mayorías que superaban el 50%- por lo que acabó imponiendo su agenda por diversos medios que compensaran su limitado apoyo electoral (Equipo Envío, 2011). Urgido de legitimación y mayores márgenes de acción institucionales para la implementación de su proyecto político, Ortega forzó la reelección de cara a los comicios generales de 2011⁸.

Esta candidatura confrontaba claras dificultades de índole legal. Estaba doblemente prohibida por el artículo 147 de la Constitución, al vetar para la máxima magistratura a cualquiera que hubiese ejercido el cargo antes en dos ocasiones (Ortega ya había sido presidente en el período 1984-1990 y después en 2006-2011) o quien estuviese en ese momento en ejercicio, como era su caso. Por tal situación -al no recibir los votos para reformar la Constitución en la Asamblea Nacional y siguiendo el ejemplo del mandatario costarricense Oscar Arias en 2006- Ortega recurrió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada exclusivamente por magistrados de su partido.

La Sala y posteriormente la Corte en pleno, declararon (en apenas 4 días) al mencionado artículo como “inconstitucional”, alegando que violaba los derechos de Ortega al vulnerar el principio de “igualdad ante la ley” (Chamorro, 2011) y avalaron la candidatura del presidente, desconociendo las protestas de partidos, organizaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanos nicaragüenses. Pese al rechazo a la sentencia de la Corte Suprema, experiencias como la de la oposición venezolana -cuyo boicot de las parlamentarias en 2005 dejó en manos del oficialismo todos los poderes del estado- aleccionó a la oposición nicaragüense, decidiéndola a presentar sus propias candidaturas en 2011 (Unión Europea, 2011).

A su vez, dentro de la dirección del Frente existieron dos posiciones respecto a la forma que deberían ser enfrentados la campaña y los resultados electorales. El sector extremista del FSLN -dirigido por Ortega, su esposa y aliados más estrechos- no quiso correr riesgos de ninguna clase, toda vez que el objetivo -no explicitado- del presidente era el de arrasar con los votos (y no simplemente ganar por el apretado margen tradicional) para poder gobernar durante los próximos cinco años con una cómoda mayoría parlamentaria. Otros -sectores empresariales y diplomáticos vinculados a las agencias y gobiernos extranjeros- creían que se podía ganar legítimamente y evitar resultados posiblemente desestabilizadores (Equipo Envío, 2011).

El FSLN desplegó una estrategia en varios frentes para alcanzar la victoria. Creó o nutrió a tres partidos pseudo-opositores (PLC, APRE y ALN) que el saldo de las elecciones se encargaría en desaparecer (Rocha, 2011). Además acudió a la vieja tendencia de usar los recursos públicos para hacer proselitismo político (Courtney, 2011), haciendo caso omiso a lo dispuesto en la Ley Electoral (Art. 103) que prohíbe el uso de dinero de empresas con participación del Estado nacional o de un Estado extranjero -como los recursos y programas vinculados a la cooperación venezolana y los fondos del ALBA- en la propaganda electoral.

El partido gobernante -superando lo que en mucha menor medida y sólo a nivel departamental hizo el PLC- empleó de forma profusa recursos públicos en beneficio de sus campañas partidarias. Ese empleo consistió en la utilización de espacios, instituciones públicas y vehículos oficiales así como la participación de empleados públicos en actividades de propaganda y la inauguración de obras y distribución de bienes y servicios públicos con propósitos proselitistas, dirección donde destaca el trabajo de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC)(Unión Europea, 2011). Además el cardenal Miguel Obando y Bravo hizo un spot a favor del Frente reproducido durante los tres días del silencio electoral (Rocha, 2011).

Una arena de especial incidencia de los esfuerzos favorables al Frente fue la específicamente relacionada con la organización y regulación electorales. Aunque el CSE exhibió una buena capacidad logística y organizativa, dio repetidas muestras de parcialidad en sus decisiones, favoreciendo la composición unilateral (FSLN) de los Consejos Electorales departamentales y municipales y de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), a través de suplantaciones, denegaciones arbitrarias y actos de intimidación para forzar las renunciaciones de fiscales de la oposición. Ello se suma al poder absoluto en los Centros de Votación (CV) de unos coordinadores nombrados a última hora, sin estar reconocidos por la ley ni sujetos a la fiscalización de los partidos opositores (Unión Europea, 2011).

Los organismos de observación nacional -a la postre ausentes del proceso- habían advertido que la presencia de fiscales de todos los partidos era el punto crucial para certificar los resultados. Sin embargo, a pesar de que la Ley Electoral consagra la observación, el CSE se negó a acreditar a dos grupos de observadores nacionales de prestigio -IPADE y Hagamos Democracia- que aceptaron plegarse a las restricciones impuestas por el “Reglamento de Acompañamiento” del CSE, que limitaba la libre circulación y la libre expresión de los observadores⁹. El CSE ordenó a última hora que las credenciales de los fiscales de los partidos deberían solicitarse en Managua por medio de un programa informático complejo, generando así nuevos obstáculos, que complicó las acreditaciones del PLI, contribuyendo a limitar en cierta medida su despliegue de fiscales durante la jornada electoral (Unión Europea, 2011)¹⁰.

El CSE fue también cuestionado por la no distribución de cédulas de identidad ciudadana a más de 200 000 personas identificadas como opositores al partido de gobierno (Courtney, 2011). El CSE, por su parte, sólo reconoció la existencia de unas 30 mil cédulas no entregadas, argumentando falta de interés de sus titulares en acudir a recogerlas¹¹. Además la repartición de las cédulas fue dejada en muchos casos en manos de cuadros del FSLN y de miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), quienes entregaron el nuevo formato a los empleados públicos (100 000) y simpatizantes del partido de gobierno sin recoger los documentos viejos, lo cual abría la posibilidad de ejercer

un doble voto. Esto se agravó al rehusar el CSE la aplicación de la tinta indeleble como marca visible para identificar a quienes hubieran ejercido su voto (Unión Europea, 2011).

En cuanto a la cobertura mediática de esta contienda, en las dos semanas previas a las elecciones parecían existir -y confrontarse- dos países diferentes, en lo que se ha denominado una esquizofrenia informativa (Equipo Envío, 2011) con medios de comunicación que evidenciaron un lenguaje crítico y sesgado hacia los diferentes candidatos¹². Aunque el artículo 90 de la Ley Electoral fija límites a la propaganda electoral en los medios de comunicación, este fue ignorado por los partidos. El FSLN contó con más publicidad que el conjunto de sus rivales, aprovechando su monopolio sobre los medios públicos -Canal 6 y Radio Nicaragua- y el control de varios privados -canales 2, 4, y 8 y Radio Ya- mientras el Canal 12 reunió la mayoría de la publicidad de los canales opositores y Radio Corporación daba publicidad al PLI. No obstante, en conjunto la publicidad de obras públicas y políticas gubernamentales y del FSLN fue mayor que la del resto de los partidos (Unión Europea, 2011).

Pese a sus maniobras el proyecto político oficialista tropezó con obstáculos imprevistos. Uno fue haber invitado a la Misión de Observación de la Unión Europea en agosto -cuando la polarización electoral no era visible y Ortega buscaba legitimar su reelección- sin poder medir entonces el impacto político que tendrían las ulteriores declaraciones de los observadores europeos. El otro fue la candidatura del empresario y actor radial Fabio Gadea, la cual dio un giro paulatino e imprevisto a la competencia electoral a partir de su lanzamiento en agosto de 2010. Con una intensísima campaña por todo el país, con discursos muy sencillos, Gadea prometió un gobierno honesto y frenar el avance del proyecto de Ortega (Equipo Envío, 2011) permitiendo a la oposición encontrar una “nueva” figura que nucleara sus demandas fuera de los actores políticos dominantes¹³.

En general la campaña electoral fue pacífica, con márgenes aceptables de libertad de expresión, movimiento y reunión, a pesar de enfrentamientos esporádicos entre seguidores de partidos rivales. La asimetría de recursos en favor de un beligerante oficialismo (Montenegro, Cuadra & Saldomando, 2011) fue compensada por el empleo del activismo y las nuevas tecnologías de la comunicación por sectores opositores e independientes, siendo las primeras elecciones en las que hubo debate a través de las redes sociales al margen de las líneas de mando impuestas por los partidos (Equipo Envío, 2011). Sin embargo, esa riqueza de posicionamientos públicos no fue correspondida por los candidatos partidarios, quienes repitieron lemas y promesas pero ofrecieron poca información sobre sus proyectos políticos (Unión Europea, 2011).

Así, la última encuesta preelectoral de CID-Gallup -realizada a nivel nacional entre el 11 y el 18 de octubre- colocaba a Ortega en primer lugar con el 48%, a Fabio Gadea con el 30% y a Arnoldo Alemán con el 11%. En tanto

otro 10% reservaba su opinión -atendiendo seguramente a la polarización de la contienda y por temor a la reacción del oficialismo-, en las últimas semanas el resultado se aproximaba a un empate técnico o a una victoria muy ajustada de Ortega (Equipo Envío, 2011).

3. Desarrollo y evaluación de los comicios

Las elecciones del 6 de noviembre de 2011 fueron impactadas por al menos tres factores: la abstención, la manipulación de los votos en las JRV y la falta de testigos que testimoniaran esa manipulación. Hubo más abstención que en las elecciones del 2006 porque, a la desconfianza en el CSE, se unió el no reconocimiento de la oposición como una alternativa de gobierno creíble por buena parte de los votantes independientes. Adicionalmente, entre las violaciones relevantes del proceso y legislación electorales destacaron la decisión del CSE de no revisar previamente las urnas para comprobar si estaban vacías, la expulsión de fiscales opositores en el momento del escrutinio final o la impresión de 2 millones y medio de boletas más de las necesarias sin ninguna justificación (Equipo Envío, 2011).

El FSLN contó con fiscales en todos los centros de votación, mientras que el PLI sólo tuvo cobertura en el 85% (Unión Europea, 2011) cifra que descendió al 70 % en cuanto a JRV se refiere (Equipo Envío, 2011). La presencia de supuestos fiscales de oposición pasivos -e incapaces de identificar al partido que representaban- sugiere la existencia de representantes del oficialismo camuflados en esos puestos (Unión Europea, 2011). La oposición estima que al impedirles tener fiscales en un porcentaje mayor, el partido de gobierno contó a solas votos que hicieron posible el despojo de entre 10 y 15 de sus diputados (Chamorro, 2011).

La jornada electoral transcurrió de manera pacífica, con la excepción de algunos incidentes violentos aislados. Hubo irregularidades en la apertura de un 15% de las urnas -impidiéndose en algunos casos la asistencia de observadores y fiscales- mientras que en el 28% de las juntas observadas hubo personas impedidas de votar y en un 30 % de las urnas los procedimientos de cómputo operaron “mal” o “muy mal”. Debe destacarse que los observadores de la UE no siempre tuvieron acceso inmediato a las JRV, ya que la Policía Electoral y los Coordinadores de centro de votación se negaron a franquearles el paso hasta que recibieron la orden de sus superiores (Unión Europea, 2011).

Fue el 11 de noviembre cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) colocó en su página de Internet el conteo oficial del 100% de las juntas receptoras, con mínimas variaciones sobre las cifras previamente anunciadas en la madrugada del 7 de noviembre: FSLN: 62.46% - PLI: 31% - PLC: 5.91 %, ALN: 0.40% - APRE: 0.23%¹⁴. Pocos días después de las elecciones, la organización IPADE hizo públicos los resultados de su observación comicial¹⁵. Analizando información pública de las JRV y datos facilitados por partidos de opo-

sición y el FSLN los resultados daban al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) alrededor del 58 %, a la Alianza PLI un el 35 % y el tercer lugar para el PLC con un 6, 5 % de los resultados (Salinas, 2011).

Se ha cuestionado un conjunto de factores que sugieren problemas en las elecciones, como la diferencia de votos entre candidatos a diputados y presidente (favorable a los primeros) inscritos en una misma boleta. Además, los votos nulos -que desde 1990 venían reduciéndose- se duplicaron en comparación con las elecciones de 2006. IPADE señaló que al menos en el 55% de las JRV se contaron votos nulos y votos válidos, que en el 43% no se registró el total de votos válidos y que en el 100% no se registró el número total de votos depositados, “por lo que no se puede determinar cuánta gente votó” (Salinas, 2011).

La Alianza PLI no aceptó los resultados y Fabio Gadea desconoció el resultado en la madrugada del lunes 7 de noviembre, declarando al día siguiente que el fraude tenía “modalidades y proporciones inauditas” y que las elecciones debían ser anuladas. El MRS y los ex-contras -integrados en la Alianza PLI- comenzaron a organizar a sus bases para una resistencia cívica. Por su parte el PLC demoró en reaccionar, mientras que ALN y APRE -aliadas de facto al gobierno- evitaron pronunciarse (Equipo Envío, 2011).

Otros actores no partidarios expresaron rechazo o incredulidad con los resultados del CSE e incluso algunos identificados con el gobierno expresaron -con discreción- su incredulidad ante la holgada victoria. La Coordinadora Civil exigió la anulación de las elecciones y el COSEP exigió la destitución de los magistrados del CSE por ser “un obstáculo al desarrollo y a la democracia en el país”, reclamando que los resultados se presentaran en Internet junta por junta (Equipo Envío, 2011).

El jefe de la Misión de Observadores de la OEA, Dante Caputo, denunció el 6 de noviembre, que en el 20% de las JRV elegidas para monitoreo les fue vetado el acceso, por lo cual señaló “Navegamos sin rumbo, y no porque se nos haya roto el radar, sino porque nos lo han tapado”. Al presentar el 15 de noviembre, su informe ante el Consejo Permanente de la OEA, coincidió con las críticas de varios actores -como la UE- y resaltó los problemas estructurales que afectan al sistema electoral nicaragüense (Equipo Envío, 2011). Por su parte los representantes del Centro Carter calificaron la elección como “la peor en términos de los obstáculos creados por el CSE para ciudadanos, partidos políticos y organizaciones internacionales”, añadiendo que “es extremadamente difícil confirmar o refutar los resultados oficiales” (Salinas, 2011).

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea -integrada por 90 observadores que visitaron 559 JRV en todo el país-presentó su informe preliminar en Managua el 8 de noviembre. La Misión evaluó positivamente la votación en el 85% de las JRV, aunque sólo el 63% de estas merecieron una valoración positiva en el recuento, en algunos casos a causa de decisiones de

anulación discriminatorias a favor del FSLN (Unión Europea, 2011). El informe fue meticuloso y exhaustivo en su análisis del proceso y sus irregularidades, presagiando una mayor comprensión del panorama vivido en estas elecciones generales para cuando se entregase la versión final a inicios del 2012.

Según los resultados del CSE, Ortega gobernaría desde el Ejecutivo no sólo con una mayoría simple (48 diputados) o cualificada (56 diputados) sino absoluta (62 diputados) permitiéndole hacer reformas constitucionales y modificar a su antojo el sistema político. De estos diputados subsisten viejos operadores políticos -que han sido reelectos y son la fuerza principal de la bancada sandinista- acompañados por una cantidad de nuevos rostros (mayormente mujeres) impulsados por Rosario Murillo desde la Coordinadora de Comunicación (Equipo Envío, 2011). No obstante, Ortega envió un mensaje con ánimo tranquilizador, dirigido tanto a sus aliados empresarios como a sectores de la oposición y población en general: *No es que porque ahora vamos a tener una amplia mayoría de diputados en la Asamblea Nacional vamos a hacer lo que nos dé la gana.... Los nicaragüenses a estas alturas ya no quieren guerras, no quieren pleitos, no quieren violencia* (Equipo Envío, 2011). Sin embargo, como recuerda una testigo privilegiada de la Nicaragua contemporánea “Ortega ha abusado de su poder en estos cinco años y a partir de ahora cuenta con un poder absoluto. Es difícil imaginar que lo ejercerá rectificando e incluyendo, negociando y debatiendo” (López, 2011)

4. *¿Quo vadis?* escenarios postelectorales

La campaña electoral y los propios comicios de noviembre de 2011 han cambiado de forma relevante el panorama político nacional, mostrando nuevos desafíos -y oportunidades- para una oposición que deberá enfrentar no ya un gobierno de tendencias autoritarias sino uno que pudiera configurarse -por su control de poderes públicos- como una dictadura. Con un régimen que fusiona estado-partido y familia -y que se halla a medio camino en la cooptación del ejército y la policía- los únicos contrapesos visibles radican en la sociedad civil y la prensa independiente -cuyos espacios se han reducido- y en una Alianza PLI que debe definir una estrategia coherente de oposición (Chamorro, 2011).

El “Pacto” entre el fortalecido FSLN y un moribundo PLC ha perdido relevancia en la vida política nacional, pues Alemán fue sacado del juego y -con apenas dos diputados en la AN- gran parte de sus bases le han abandonado. Por su parte, el riesgo de inhibición pesa sobre los diputados electos de la Alianza PLI (Unión Europea, 2011) como consecuencia de recursos de amparo planteados por viejos militantes -y acogidos por el CSE- que denunciaron el “robo del partido” (Rocha, 2011) cuestionando las candidaturas previamente aceptadas por el ente comicial e incorporadas en la boleta electoral (Chamorro, 2011). Además de superar ese desafío, ante la Alianza PLI se erigen las alternativas de asumir sus escaños pactando y negociando con Ortega en función de

cargos y prebendas o comprometerse a defender, dentro y fuera del parlamento, los intereses de su electorado.

En su conjunto la oposición partidaria y social tendrá que enfrentar su mayor déficit político: la falta de conexión entre su discurso de defensa de la ley y la institucionalidad con las demandas sociales de la gente (Chamorro, 2011). El discurso solo tendrá un impacto político real si se vincula a una gestión política y social de base, que desde los intereses de la gente (empleo, salarios, salud, vivienda, seguridad etc.) ofrezca a las mayorías pobres una alternativa de esperanza más allá del clientelismo y las políticas oficiales. Para ello podría intentar aprovechar a su favor los modestos pero visibles avances en materia de concientización de derechos y demandas de participación, que explican el beligerante reclamo de aquellos pobladores pobres de más de 40 municipios rurales -muchos de ellos escenarios de guerra en los años 80- que exigieron al CSE algo tan básico e importante como su cédula de identidad y se convirtieron en defensores del voto (Equipo Envío, 2011).

En la Nicaragua actual el proceso político abierto tras las elecciones de 2011 parece consagrar la asimetría de fuerza entre los contendientes, en beneficio de este nuevo FSLN cuya capacidad de controlar y cooptar parece imbatible, con un manejo pragmático de lo público encubierto de retórica revolucionaria. Trasladando sus métodos partidarios, el estilo de su liderazgo y su estructura de intereses al estado -con proyección de mantener el control sobre este- el FSLN fortalece su poder mediante mecanismos para y extra-institucionales. Posee y erige una estructura de poder exitosa, por el control del Estado y su inserción en los negocios, donde se aprecia un bajo respeto por la institucionalidad y los derechos civiles y políticos ejercidos de forma autónoma a sus redes e intereses (Saldomando, 2011).

Sin embargo, semejantes características -que son condición de posibilidad de su hegemonía dentro del campo político nacional- constituyen también factores potenciales de debilidad del FSLN. Una estructura y proyecto políticos tan personalistas, que dejan escaso margen al relevo generacional en su liderazgo y carecen de un sistema de meritocracia partidaria y administrativa, no desarrolla la capacidad de reproducción de la organización a largo plazo. En similar dirección operan la sistemática purga de cuadros viejos, expertos y fieles -que construyeron la estructura nacional del partido- en momentos en que apuestan a expandir su militancia y radio de acción y el enfrentamiento de Rosario Murillo con el sector empresarial del FSLN (Rocha, 2011).

La reelección de Ortega simboliza para algunos analistas la implantación de un modelo que combina el autoritarismo político con los negocios privados y el clientelismo social, apuntalados en la privatización de la millonaria cooperación económica venezolana (Chamorro, 2011). Se insiste en que Ortega podría reformar la Ley de Leyes o convocar una asamblea constituyente -para permitir la reelección presidencial indefinida y eliminar los obstáculos

a futuras candidaturas presidenciales de sus familiares-, además de institucionalizar a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como parte de la nueva geometría política del territorio y estado nicaragüenses. También podría establecer nuevos controles sobre las ONG y los medios -colocándolas en la disyuntiva de ser cooptadas por el proyecto oficial o desaparecer- y modificar la Ley Orgánica del Ejército Nacional partidizando esta institución al mismo tiempo que controla la policía (Equipo Envío, 2011)¹⁶.

Las opciones para la despolarización y emergencia de un proyecto político capaz de canalizar las demandas de sectores no representados por el orteguismo o sus oponentes no aparecen en el horizonte. Según la opinión de una destacada analista y líder política opositora “El escenario es de polarización entre el orteguismo y el antiorteguismo. Una vez que se restablezcan las instituciones democráticas podrá hablarse de proyectos específicos” (Téllez, comunicación personal, 7/12/2011). Para otra protagonista el escenario es aun peor pues “Ya en estos momentos es evidente que en Nicaragua no existe ninguna polarización. Mucho menos entre izquierda y derecha. El país entero se encuentra en una situación de gran estabilidad producida por el control absoluto del poder, por la vía pacífica” (Baltodano, comunicación personal, 17/3/2012).

El recuerdo de los costos de la guerra y el miedo por la violencia y los ajustes de cuenta paralizan -hasta el momento- la acción colectiva, como demuestran las agresiones a opositores civiles organizadas y ejecutadas por las estructuras del FSLN¹⁷. Pero el disenso no es eliminado y se avanza -ante la aparente clausura de los espacios y métodos de lucha institucionales- a una nueva radicalización de los oponentes, fenómeno que recuerda etapas anteriores de la historia nicaragüense. Sobre todo porque el régimen vigente reproduce las debilidades históricas del país y -aunque busca compensar su impacto social con un poder político concentrado- deja sin resolver los problemas estructurales que “pesan” sobre el desarrollo político nacional (Saldomando, comunicación personal 12/9/2011) reforzando los persistentes niveles de inestabilidad e incertidumbre que amenazan la gobernabilidad de la empobrecida nación centroamericana.

Notas

¹ Partido político fundado en 1961, bajo la influencia directa de la Revolución Cubana e inspirado en el pensamiento y lucha de Sandino y la perspectiva marxista, que apeló a la lucha armada para el derrocamiento del régimen somocista e impulsó el establecimiento de una sociedad socialista. Desarrolló una concepción nacionalista y anti-imperialista de la lucha y trató de vincular, a través de una organización política-militar, las lógicas del frente de masas y la "vanguardia revolucionaria". A su interior coexistieron tres tendencias ideológicas principales -con referentes territoriales y clasistas diversos- que convergieron

en una Dirección Nacional en 1979. El FSLN se convirtió en un partido-estado durante la etapa revolucionaria de 1979 a 1990, transformándose desde su salida del poder y hasta la fecha en una de las principales fuerzas políticas nicaragüenses. A lo largo de la década de los 90 sufrió una escisión que favoreció a la tendencia dirigida por Ortega, quien pasó a concentrar el poder de decisión e imponer su línea ideológica -notablemente “corrida” al centro- y una agenda política que incorpora elementos religiosos y mesiánicos. Los sandinistas disidentes -incluidos cuadros destacados como Dora María Téllez e intelectuales como Sergio Ramírez- fundaron en 1995 el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), organización de centroizquierda, con una prédica de fortalecimiento institucional, combate a la corrupción y promoción del desarrollo económico. El MRS se ha convertido -pese a su pequeño tamaño y recursos- en la oposición más consistente del FSLN, lo cual le ha valido la hostilidad oficialista en los ámbitos electorales, mediático y penal.

² Partido fundado en 1968 por disidentes del somocismo. Desde inicios de la Revolución fue adverso al sandinismo y en 1989 formó parte de la Unión Nacional Opositora, alianza de partidos opositores triunfante en las elecciones de febrero de 1990. En estos comicios el PLC, en la figura del líder Arnoldo Alemán Lacayo alcanzó el gobierno de Managua, que retuvo por cinco años, hasta alcanzar en 1996 la presidencia de la república (por el período 1997-2001) con un 45% total de los votos válidos. En las elecciones de 2001 el PLC obtuvo más de 50 % de los votos y dispuso de la mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Los acuerdos entre el ex presidente Alemán (procesado por corrupción por su sucesor) y Daniel Ortega, unidos a la escisión surgida por desacuerdos de sectores disidentes con la gestión de su caudillo y la fundación por estos de la Alianza Liberal Nicaragüense sirvieron de catapulta al triunfo del FSLN en 2006. La ideología del PLC es una mezcla de liberalismo tradicional, neoliberalismo modernizante y populismo de derecha con anclaje rural.

³ Partido formado por disidentes del PLC opuestos al control ejercido por Alemán dentro de dicho partido y a sus pactos con Ortega. Fundado en el 2006 por Eduardo Montealegre sería la segunda fuerza política más votada en las elecciones generales de aquel año, con un 28 % del total de votos y 23 diputados en la Asamblea Nacional. Ha establecido alianzas con pequeños partidos como el Partido Conservador (PC) y el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) y su ideología tiene una orientación neoliberal, tecnocrática y modernizadora, que apuesta por la privatización, el gobierno pequeño y la mayor integración del país a los procesos globalizadores.

⁴ Hemos tomado la información y argumentaciones en torno al desarrollo y resultado de estos comicios de (Equipo Envío, 2008), (IPADE, 2009) y (MINREX, 2009).

⁵ Iniciativa que reúne, con fines informativos, consultivos y de promoción

democrática y electoral, a los órganos electorales de Sudamérica. Fue fundada en septiembre de 1989 en Quito, Ecuador -de ahí su nombre- y carece de mecanismos vinculantes o de capacidad de incidencia directa en los procesos que acompaña.

⁶ Para un análisis de la evolución política y legal de la Nicaragua contemporánea ver (Kinloch, 2008) (Esgueva, 2003) (Alvarez & Vintró, 2009) (Martínez, 2009) (Mc Connell, 2009).

⁷ El número de personas en el registro electoral disponible en las elecciones generales de 2011 fue de 4 millones 320 mil 94, de los cuales el CSE estima que sólo unos 3 millones 400 mil están realmente habilitados. La falta de depuración del registro es un problema que Nicaragua arrastra de anteriores procesos y que se agravó en esta ocasión por el hecho de que la ciudadanía dispuso de solo dos días para verificar su inscripción y solicitar correcciones. Además, sólo el 6 de octubre el CSE facilitó una copia del Registro Electoral Nacional a todos los partidos políticos.

⁸ “Ortega tiene un liderazgo real en un tercio de la población, vinculada histórica y emocionalmente al Frente Sandinista, a la lucha contra Somoza, a la guerra con la Contrarrevolución” (López, comunicación personal, 20/12/2011)

⁹ Por su parte la ONG Ética y Transparencia decidió no plegarse al Reglamento y rechazó acreditarse (Unión Europea, 2011).

¹⁰ Las disposiciones del CSE suscitaron el rechazo de los observadores de la OEA y de la Unión Europea, quienes cuestionaron un manual de capacitación de miembros de las mesas de votación aprobado por el Consejo, donde se desconocía la existencia de observadores del conteo de los votos y las copias del acta de escrutinio para los fiscales de los partidos. Presionado, el CSE señaló que estas eran disposiciones “apócrifas” y se comprometió a eliminarlas (Courtney, 2011).

¹¹ Hubo oficinas municipales de cedulación que abrieron tarde y otras nunca, mientras que en algunas se pedía una carta de recomendación de los CPC. Mientras, en las sedes del FSLN de muchos municipios se hacían trámites de entrega de cédula (Courtney, 2011).

¹² Algunos medios -Canal 14 y Radio Universidad- no incorporaron propaganda electoral a su programación (Unión Europea, 2011).

¹³ Director de Radio Corporación, Gadea es -desde hace medio siglo- la voz del personaje “Pancho Madrigal”, que forma parte del imaginario de amplios sectores de la población pobre, tanto urbana como -principalmente- rural.

¹⁴ Para acceder a los resultados oficiales del CSE ver <http://www.cse.gob.ni/md5/resldipparl.php>.

¹⁵ El estudio fue realizado tomando como referencia 1,168 Juntas Receptoras de Votos, urbanas y rurales, un 10% de las más de 12,900 JRV de todo el país, contando con un margen de seguridad estimado en el 98%. Para ver el análisis completo realizado por la organización (IPADE, 2011).

¹⁶ Reconocidas nacional e internacionalmente, por su despartidización, profesionalización, y apego a la ley, ambas instituciones representan los dos casos más exitosos de la transición nicaragüense (Chamorro, 2011).

¹⁷ “Nicaragua es un país en donde el recurso a la violencia es una experiencia muy cercana en el tiempo y muy habitual....Quienes no simpatizan con Ortega le tienen miedo a las consecuencias de que vuelva a la oposición. Esto explicaría también una pasividad generalizada para organizarse y desafiar su poder” (López, comunicación personal, 20/12/2011).

Referencias

- Alvarez, Gabriel & Vintró, Juan. (2009). “Evolución Constitucional y cambios institucionales en Nicaragua (1987-2007)”. En Salvador Martí y David Close (eds.) *Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué queda de la revolución?*. Barcelona: Edicions Bellaterra, pp. 169-220.
- Asamblea Nacional (2010). Constitución Política de la República de Nicaragua. Recuperada el 10 de octubre de 2010, de <http://www.asamblea.gob.ni/opciones/constituciones/ConstitucionPolitica.pdf>.
- Chamorro, C. (2011). “El ‘golpe’ y la oposición”. En <http://www.confidencial.com.ni/articulo/5612/el-lldquo-golpe-rdquo-y-la-oposicion>.
- Courtney, Roberto (2011). “Vaticinios inquietantes en vísperas del 6 de noviembre”. Managua: revista *Envío*, Número 356, Noviembre, pp. 15-20.
- Equipo Envío (2011). “Elecciones 2011: perdió Nicaragua”. Revista *Envío*. Managua, Número 356, Noviembre, pp. 3-14.
- Equipo Envío (2008). “Elecciones municipales: una crisis anunciada- perdió Nicaragua”. Revista *Envío*. Managua, Número 320, Noviembre, en <http://www.envio.org.ni/articulo/3890>.
- Esgueva, Antonio (2003). *Historia Constitucional de Nicaragua*. Managua, LEA Grupo Editorial.
- Instituto para el Desarrollo y la Democracia (2011). Informe de observación pre-electoral 2011, en <http://www.ipade.org.ni/docs/elecciones/elecciones%20nacionales%202011.pdf>.
- Instituto para el Desarrollo y la Democracia (2009). Informe final - IPADE - elecciones Municipales 2008/2009. Managua.
- Kinloch, F. (2008). *Historia de Nicaragua*. (3era ed.). Managua: IHNCA-UCA.
- Martínez, Elena. (2009). “El sistema judicial ¿el secuestro de una Corte Suprema?”, en Salvador Martí y David Close (eds.) *Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué queda de la revolución?*. Barcelona: Edicions Bellaterra, pp. 221-264.
- Mc Connell, Shelley, A. (2009). “La evolución incierta del sistema electoral nica”. En Salvador Martí y David Close (eds.) *Nicaragua y el FSLN*

- (1979-2009). *¿Qué queda de la revolución?*. Barcelona: Edicions Bel·laterra, pp. 265-312.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua (2009). *Libro Blanco: La realidad del proceso electoral municipal del 2008 en Nicaragua*. Managua.
- Montenegro, S., Cuadra, E. & Saldomando, A. (2011). “Una apuesta con los dados cargados”. *Perspectivas*. Managua, Centro de Investigación de la Comunicación, No. 59, agosto.
- Rocha, Jose Luis (2011). “Elecciones 2011 - FSLN: por las buenas y por las malas”. Revista *Envío*. Managua, No. 356, Noviembre, pp. 28-33.
- Saldomando, Ángel. (2011). “La lenta mutación del FSLN”. *Perspectivas*. Suplemento de análisis político, No. 55, Mayo en <http://www.confidencial.com.ni/cinco/5.2011.pdf>.
- Salinas, Carlos (2011). “IPADE: no se puede avalar resultado CSE”. En <http://www.confidencial.com.ni/articulo/5509/ipade-no-se-puede-avalar-resultado-cse>.
- Europea, Unión (2011). “Un proceso carente de neutralidad y transparencia”. Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Managua. Revista *Envío*, No. 356, Noviembre, pp. 21-27.

Bibliografía y hemerografía

Testimonios personales

- Ángel Saldomando (investigador, Centro de Investigación de la Comunicación) 12/9/2011.
- Dora María Téllez (analista y líder del Movimiento Renovador Sandinista) 7/12/2011.
- María López Vigil (analista y directora, revista *Envío*) 20/12/2011.
- Mónica Baltodano (analista y líder del Movimiento por el Rescate del Sandinismo) comunicación personal, 17/3/2012).

Anexos

Resultados electorales en Nicaragua (1984-2011)

(A -Porcientos de candidatos presidenciales; B- escaños ocupados en el poder legislativo).												
Partidos/ Alianzas	1984		1990		1996		2001		2006		2011	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
FSLN	67	61	40,8	39	37,75	36	42,3	43	38	38	62,46	62
UNO	--	--	54,7	51	1	--	--	--	--	--	--	--
AL/PLC	--	--	--	--	51,03	42	56,3	47	26,1	25	5,91	2
ALN	--	--	--	--	--	--	--	--	29,3	24	0,40	
PC (1)	--	--	--	--	2,26	3	1,4	2	--	--		
MRS	--	--	--	--	0,45	1	--	--	6,4	5		
PCD (2)	14	14	--	--	--	--	--	--	--	--		
PLI (3)	9	9	--	--	--	--	--	--	--	--	31	26
PPSC (4)	5,6	6	--	--	--	--	--	--	--	--		
PCdN (5)	1,5	2	--	--	--	--	--	--	--	--		
PSN (6)	1,5	2	--	--	--	--	--	--	--	--		
MAP NL (7)	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--		
Otros			4,5	2	8,51	9	--	--	0,2	--	0,23	

Nota: Además de los escaños ocupados por los partidos se reservan diputaciones a presidentes salientes.
Fuente: Elaboración propia con base en (Martí, 2009), (Font y Gomá, 1991) y CSE (2011)

Notas

- 1. Partido Conservador:** Es el partido más antiguo de Nicaragua. Se formó en los 30 del siglo XIX, bajo la dirección de ganaderos y comerciantes de la ciudad de Granada, con bases sociales predominantemente rurales y relaciones marcadas por el clientelismo y el paternalismo. Pese a su sesgo tradicionalista, las elites de este partido promovieron la introducción de capitales extranjeros y un mayor rol del estado en la economía mundial. En la defensa de sus intereses como grupo dominante y acordarán diversos pactos con el régimen de los Somoza. Hoy es un partido debilitado, que recuperó su registro antes de las pasadas elecciones, bajo sospecha de una posible estrategia gubernamental para fragmentar el voto opositor.
- 2. Partido Conservador Demócrata (1979):** En las elecciones de 1990 compitió independiente, quedó en noveno lugar y no obtuvo escaños en el parlamento.
- 3. Partido Liberal Independiente (1944):** Disidencia del somocismo, que reivindicaba el liberalismo tradicional. Dirigido por intelectuales y ligado a las clases medias urbanas, aglutinará sectores que no hallaban en el bipartidismo dominante (Liberal-Conservador) espacios para oponerse al régimen. Posteriormente sus estructuras han servido para encauzar diversas agendas e intereses políticos.

4. **Partido Popular Social Cristiano (1976):** Escisión del Partido Social Cristiano, que apoyó al FSLN frente al somocismo y lo adversó en los 80. Formó parte de la UNO hasta su salida en 1992, cuando se fusiona con otro partido para crear la Unión Demócrata Cristiana. Desde 2001 establece una alianza con el FSLN.
5. **Partido Comunista de Nicaragua (1967):** Disidencia del Partido Socialista Nicaragüense, que elige la lucha armada y adopta su nombre actual en 1970. Integró la UNO en 1990, compitió independiente en 1996 y posteriormente forma parte de la Alianza PLC.
6. **Partido Socialista Nicaragüense (1944):** Organización de trabajadores y artesanos, vinculada a ideas de reforma social. Fue una organización opositora legal durante el somocismo. En 1990 se integró en la UNO para enfrentar al FSLN.
7. **Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista (1972):** Fundado como fuerza marxista/maoísta autónoma, pero vinculada al FSLN. Perseguido en los 80 por el FSLN, asumió la única oposición parlamentaria a la Constitución de 1987. Perdió sus escaños (1990) y registro (1996) por el bajo apoyo de los votantes. Desde 2001 hace alianza con el FSLN.